

https://eldeber.com.bo/opinion/bolivia-necesita-algo-ajuste-economico_1792187497

sábado 17 de octubre, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

EL DEBER

Radio FM 103.3

Iniciar sesión

Portada Santa Cruz País Economía Mundo Educación y
Sociedad Comunicados Opinión Últimas Noticias En El Recuerdo E-Paper ED Investiga

Bolivia necesita algo más que un ajuste económico

Sábado, 17 de octubre de 2026 a las 05:00



Por **Steven E. Hendrix**

Bolivia ya ha vivido un ajuste estructural. Quienes recuerdan la crisis de los años ochenta saben que la estabilización económica puede exigir sacrificios enormes. La

hiperinflación había destruido el poder adquisitivo de los salarios, los ahorros perdían su valor de un día para otro y el Estado había perdido buena parte de su capacidad para administrar la economía. El Decreto Supremo 21060, promulgado en 1985 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, puso fin a la hiperinflación, pero también abrió un período de profundos cambios económicos y sociales, cuyos costos todavía forman parte de la memoria colectiva boliviana.

Cuatro décadas después, Bolivia enfrenta otra crisis económica de gran magnitud. El agotamiento de las reservas internacionales, la escasez de divisas, el deterioro fiscal y los problemas del sector energético han obligado al país a emprender nuevamente un proceso de estabilización. El reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por aproximadamente 1.900 millones de dólares, ofrece financiamiento y cierto margen de maniobra al gobierno del presidente Rodrigo Paz. Es un paso importante, aunque sería un error confundir el acceso al financiamiento con la recuperación de la economía.

Conozco Bolivia desde hace décadas. He tenido el privilegio de estudiar su derecho, ejercer la abogacía en el país y trabajar con bolivianos de distintas generaciones y orientaciones políticas. También he dedicado buena parte de mi carrera al desarrollo institucional y a la gestión pública en varios continentes. Esa experiencia me ha convencido de que los problemas económicos más persistentes rara vez pueden separarse de la calidad de las instituciones que administran los recursos públicos.

Durante los años de bonanza de las materias primas, Bolivia dispuso de una oportunidad extraordinaria. Los ingresos provenientes de los hidrocarburos permitieron financiar programas sociales, ampliar la inversión pública y acumular reservas internacionales. Hubo avances sociales importantes que merecen reconocimiento. Sin embargo, la abundancia de recursos también permitió postergar decisiones difíciles. La dependencia de los ingresos extractivos, la expansión del gasto público y las debilidades de la administración estatal quedaron parcialmente ocultas mientras los precios internacionales fueron favorables. Cuando cambiaron las condiciones, las vulnerabilidades comenzaron a manifestarse con creciente intensidad.

La responsabilidad de lo ocurrido merece un examen riguroso, particularmente de las decisiones adoptadas durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Pero la historia institucional de Bolivia es mucho más larga que los últimos veinte años. La utilización política de las instituciones públicas, el clientelismo, la inseguridad jurídica y la dificultad para exigir responsabilidades a quienes ejercen el poder han atravesado

gobiernos de distintas tendencias. Sería demasiado cómodo atribuir todos los problemas a un solo partido o a una sola generación de dirigentes.

La corrupción y la captura del Estado representan amenazas existenciales para el desarrollo boliviano. Cuando los contratos públicos dependen de relaciones políticas, cuando la justicia carece de independencia o cuando una empresa estatal sirve a intereses particulares, las consecuencias se extienden mucho más allá de las personas directamente involucradas. Se encarecen las obras, disminuye la calidad de los servicios, se desalienta la inversión y se deteriora la confianza ciudadana. Los recursos que deberían financiar escuelas, hospitales e infraestructura terminan produciendo beneficios para unos pocos.

Por eso considero que el ajuste estructural más importante que necesita Bolivia es el de su gobernanza. La estabilización fiscal y monetaria es indispensable, pero sus resultados serán frágiles si el país conserva las mismas prácticas institucionales que contribuyeron a la crisis. Una reforma seria debe incluir una justicia independiente, mecanismos eficaces de fiscalización, transparencia en las contrataciones públicas, profesionalización del servicio civil y consecuencias reales para quienes abusan de los recursos del Estado. La rendición de cuentas debe alcanzar tanto a las autoridades actuales como a las anteriores.

El acuerdo con el FMI contempla compromisos relacionados con la transparencia, la gobernanza y la integridad institucional. Conviene aprovechar esa oportunidad, pero las reformas no deberían depender de la presión de un organismo internacional. Bolivia cuenta con juristas, economistas, empresarios, académicos, periodistas y servidores públicos perfectamente capaces de formular y llevar adelante una agenda propia. He conocido personalmente a muchos profesionales bolivianos de extraordinaria preparación y compromiso con su país. La capacidad humana existe. El desafío consiste en construir instituciones que permitan aprovecharla.

También es necesario reconocer la dimensión social del ajuste. Una familia que enfrenta el aumento del costo de vida difícilmente encontrará consuelo en las cifras de las reservas internacionales o en las proyecciones de crecimiento. La estabilización requiere credibilidad, pero también sensibilidad social. Las autoridades tendrán que explicar con claridad las medidas adoptadas, proteger a los sectores más vulnerables y demostrar que los sacrificios se distribuyen con justicia. Resultaría especialmente difícil pedir austeridad a la población mientras persisten privilegios, despilfarro o impunidad dentro del aparato estatal.

El gobierno de Rodrigo Paz tiene ante sí una responsabilidad histórica. Su éxito no debería medirse únicamente por la reducción del déficit, la recuperación de las reservas o la llegada de nuevas inversiones. También habrá que examinar si consigue fortalecer instituciones capaces de funcionar con independencia del gobierno de turno. La credibilidad de las reformas dependerá, en buena medida, de que las reglas se apliquen incluso cuando hacerlo resulte políticamente incómodo.

Bolivia posee recursos naturales importantes, una diversidad cultural extraordinaria y una población que ha demostrado repetidamente su capacidad de trabajo, adaptación y resistencia frente a la adversidad. Su historia ofrece abundantes razones para reconocer la magnitud de los desafíos, pero también para confiar en sus posibilidades. El país puede superar la crisis actual y recuperar una trayectoria de crecimiento. Para conseguirlo, tendrá que afrontar las deficiencias institucionales que han limitado su desarrollo durante demasiado tiempo.

En 1985, Bolivia tuvo que reconstruir su estabilidad monetaria. En 2026, tiene la oportunidad de emprender una transformación igualmente trascendental: recuperar la confianza en sus instituciones. De esa tarea dependerá buena parte de su futuro.

Sobre el autor: Steven E. Hendrix es abogado habilitado para ejercer en Bolivia, Ghana, Guatemala y Estados Unidos. Fue alto funcionario del Departamento de Estado y de USAID, con responsabilidades en desarrollo institucional, gobernanza y política de cooperación internacional